

Expresión de agravios.

Procedencia del Recurso de Apelación formulado.

Sra. Jueza Civil y Comercial Común 3ª Nominación.

Juicio: PROVINCIA DE TUCUMÁN C/ SANTOS FRANCISCO JOSE Y OTROS S/ EXPROPIACIÓN (Expte. 1421/12-II).

ALDO LUIS CERUTTI, abogado, con las condiciones acreditadas en autos, en representación judicial del Estado provincial demandante, a V. E. manifiesto:

1. Por medio del presente escrito, cabe expresar agravios respecto del RECURSO DE APELACIÓN formulado con relación a la SENTENCIA de fecha 14/08/2019, dictada por el Sra. Jueza Civil Y Comercial Común de la 3ª Nominación, en cuanto declara en el asunto en debate la inconstitucionalidad de la LP 8851 y de su reglamentación.

Entiendo que en el punto debatido la SENTENCIA del 14/08/2019 no importa una derivación racional, razonable, cabal y suficiente tanto del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al debate propuesto como de los hechos relevantes debidamente comprobados en la causa, en tanto resuelve: "I.- HACER LUGAR AL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto por la demandada a fs. 40/41 y consecuentemente declarar la inaplicabilidad al presente caso de la Ley N° 8851 y su decreto reglamentario 1583/1/2016, en mérito a lo considerado.- II.- IMPONER COSTAS a la actora vencida en el planteo de inconstitucionalidad".

Considero que la Sra. Jueza de 1ª Instancia desestima la aplicación por inconstitucionalidad de la LP 8851 y de su reglamentación a partir de una lectura marcadamente parcial, insuficiente y asistemática de la cuestión en pugna. Asimismo, entiendo que la Sra. Jueza

de 1ª instancia prescinde en su análisis de hechos relevantes debidamente comprobados en la causa y que hacen a la adecuada composición, comprensión y resolución del litigio entablado.

En resumidas cuentas, considero que en el punto impugnado la SENTENCIA del 14/08/2019 supone el injustificado ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendada al magistrado judicial que dictó la resolución judicial controvertida. En efecto, cabe sostener que, en un Estado de Derecho, "el poder no es absoluto y, fundamentalmente, no es oculto, sino transparente. El conocimiento público coadyuva en la imparcialidad del órgano, resguardando también el principio de legalidad, pues una legalidad no controlable (a través de la motivación) equivale a una no legalidad, y es precisamente en la fundamentación de la decisión en donde el juez demuestra que la ley ha sido válidamente aplicada al caso" (Cf. Augusto Mario Morello, "El Proceso Justo", Platense, Abeledo-Perrot).

Pues, "la sentencia es un acto del poder estatal que necesita legitimarse en algo más que en un mero hecho de fuerza, dado que el Derecho no es solamente voluntad o poder, sino también, y principalmente, Justicia" (Cf. W. Goldschmidt, "Justicia y Democracia", La Ley, 87, 324). En definitiva, **el deber de fundamentación decisiva y suficiente respecto de una sentencia judicial importa un requisito inherente al poder público que le ha sido confiado a los magistrados judiciales** (Cf. CSJT, "LOW TRACK", SENTENCIA 410/2018). De allí, la necesidad de promover la revisión judicial de la SENTENCIA del 14/08/2019 en el punto objeto de impugnación.

2. TACHA DE ARBITRARIEDAD

En palabras de Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió, "La noción de 'sentencia arbitraria' o, mejor

dicho, la procedencia del recurso [extraordinario] en los casos en que se trata de rever pronunciamientos susceptibles de ser así rotulados, se funda directamente en la Constitución Nacional y, en especial, en la garantía de defensa en juicio establecida por el art. 18. Una sentencia arbitraria no es una sentencia judicial a los fines de este precepto. El 'cuarto inciso' del art. 14, ley 48, está en cierto modo escrito en la Constitución. La Corte, al menos, ha sabido leerlo allí. Tal es la explicación más atendible, que no excluye otras ligados a ella" (Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió, *El recurso extraordinario por sentencia arbitraria*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983, 3ª edición actualizada).

En relación con la "arbitrariedad" en materia de "fundamentos" de la decisión, o bien, del "establecimiento del fundamento normativo" de ésta, los autores han aludido a los casos en que los jueces, al dictar sentencia, "se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico, o (...) prescinden del texto legal sin dar razón plausible alguna, o (...) dan como fundamentos pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente aplicables" (G. R. Carrió y A. D. Carrió, *op. cit.*, p. 58).

Por su parte, Lino E. Palacio ha destacado entre las principales hipótesis de sentencias arbitrarias el "apartamiento de la solución normativa o de las constancias de la causa", la "carencia o insuficiencia de fundamentos", el "desconocimiento o interpretación irrazonable de la prueba" y las "omisiones de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes para la solución del caso" (Lino E. Palacio, *El recurso extraordinario federal. Teoría y técnica*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, 3ª edición ampliada y actualizada, pp. 232-247).

En el caso de autos, considero que la sentencia objeto de impugnación, no solo "omite hacerse cargo de cuestiones conducentes y relevantes para la debida composición de la litis" (CSJT, sentencia 5 de fecha 02/03/2010. Jueces Estofan, Goane, Sbdar), "de indudable relevancia para la adecuada solución del caso" (CSJT, sentencia 1039 de fecha 30/10/2006. Jueces Dato, Goane, Gandur), sino también ha sido dictada "sin considerar razonablemente y conforme a las reglas de la lógica" las constancias relevantes de las actuaciones "cuando éstas revisten el carácter de pertinentes para la solución del litigio" (CSJT, sentencia 623 de fecha 01/07/2009. Jueces Gandur, Goane, Estofan).

La sentencia impugnada "no se exhibe como la derivación razonada del discurso lógico que la precede" (CSJT, sentencia 399 de fecha 22/05/2007. Jueces Dato, Brito, Area Maidana); así como produce una incorrecta valoración del cuadro probatorio de la causa y de la composición de la litis con marcada vulneración del principio de la sana crítica (CSJT, sentencia 1105 de fecha 30/11/2009. Jueces Estofan, Goane, Sbdar). Pues, la SENTENCIA de fecha 06/09/2018 promueve una solución del litigio sin atender adecuadamente las constancias de las actuaciones, ni abordar adecuadamente la composición de la litis y las disposiciones normativas aplicables al supuesto en debate, ni esgrimir fundamentos racionales suficientes al respecto, ni valerse de una fundamentación en hechos conducentes acreditados en el caso y en el ordenamiento jurídico vigente.

La CSJT ha enfatizado que: "Carece de motivación suficiente y, por ende, es nula la sentencia que efectúa una consideración retaceada de las constancias de autos, prescindiendo de alegaciones, circunstancias fácticas y pruebas pertinentes para la recta composición de la litis" (CSJT, 26/09/2011, "Ganem Héctor Javier v. Superior Gobierno de la

Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios", SENTENCIA 747 -casación-).

En el punto impugnado, la SENTENCIA del 14/08/2019 no se exhibe como la derivación razonada del ordenamiento jurídico invocado para sostenerla. Asimismo, la magistrada judicial de 1ª instancia omite hacerse cargo de cuestiones relevantes o conducentes para la adecuada ponderación del debate propuesto, así como prescinde de elementos claramente ineludibles para la adecuada resolución de la disputa promovida en autos.

En suma, entiendo que también en el punto impugnado la SENTENCIA del 14/08/2019 no importa una derivación razonada del ordenamiento jurídico vigente *"con particular y pormenorizada aplicación a las circunstancias de la causa"* (Cf. CSJN, Fallos: 318-2431; 328-3638 y 3720; 329-2464; 330-2186; 331-466).

En especial, respecto de la carencia decisiva de fundamentación suficiente, la CSJT ha sostenido que:

Hace a la debida fundamentación del acto sentencial la consideración y decisión sobre cuestiones esenciales y determinantes en relación a las pretensiones objeto del proceso (...) el pronunciamiento justifica su razonabilidad, posibilita el re-examen del pleito en las instancias ordinarias y extraordinarias por los Tribunales Superiores y, finalmente, satisface el principio republicano de gobierno (...) incurre en el vicio de arbitrariedad la sentencia que solo tiene fundamentación aparente, esto es, entre otros supuestos, aquella que se limita a citar y analizar conceptualmente las normas de derecho positivo sin expresar los fundamentos de su adecuación al caso concreto (CSJT, 12/05/1992, sentencia n° 164, Dres. Padilla, Ponsati, Goane).

Analizando la causa de sentencia sustentada en afirmaciones dogmáticas, o de aparente fundamento, o basado en el mero voluntarismo de los jueces, debemos decir que para que se configure este vicio, el pronunciamiento atacado debe haberse elaborado en opiniones carentes de sustentación objetiva, ya

por lo tanto un fundamento solo aparente que les resta toda fuerza de convicción" y, por el otro, cuando "se apoyan en conceptos imprecisos o excesivamente latos, genéricos o conjeturales que, por ello, impiden verificar de qué manera se llega a la solución del litigio" (L. E. Palacio, op. cit., p. 235).

También cabe subrayar que son pasibles de tacha de arbitrariedad "las sentencias que prescinden de lo dispuesto por la ley en relación con el caso, o aplican las normas pertinentes de modo que las desvirtúan o tornan inoperantes (...) las sentencias en las cuales, conscientemente, se deja de lado la aplicación de normas jurídicas que rigen el caso, así como aquellas que aparecen fundadas en normas derogadas o aún no vigentes a la fecha de su pronunciamiento (...) las sentencias que comportan un inequívoco apartamiento de las constancias de la causa y de las alegaciones de las partes" (L. E. Palacio, op. cit., pp. 232-234).

A su turno, es preciso enfatizar que incurren en arbitrariedad por auto-contradicción "los pronunciamientos judiciales que, al margen de la lógica, declaran simultáneamente la aplicabilidad e inaplicabilidad de una misma norma, extraen conclusiones opuestas respecto de un mismo hecho o exhiben incongruencia entre la conclusión y los fundamentos que la preceden" (L. E. Palacio, op. cit., pp. 259-260).

Sobre esta base, entiendo necesario enfatizar que en el punto impugnado de la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 la Sra. Jueza de 1ª Instancia incurre en una notoria carencia de fundamentación decisiva y suficiente para intentar justificar la decisión impugnada.

Por un lado, la Sra. Jueza de 1ª Instancia reputa inaplicable al caso por inconstitucional a la LP

8851 con argumentos marcadamente infundados. Por el otro, la Sra. Jueza de 1ª Instancia desconoce la legitimidad del principio de previsibilidad presupuestaria del Estado como argumento suficiente para la limitación (temporal, por supuesto) del efecto ejecutorio de las sentencias dictadas en contra del Estado. En especial, respecto de aquellas sentencias que se traducen en la obligación de dar sumas de dinero.

Con esta posición, entiendo que la Sra. Jueza de 1ª Instancia quebranta injustificadamente el mecanismo de pago de deuda pública instituido a partir de una prerrogativa pública legítima reconocida al Estado provincial demandado (Cf. CSJN, Fallos: 339-1812, entre otros).

En suma, considero que en el punto impugnado de la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 la Sra. Jueza de 1ª Instancia desconoce arbitrariamente los alcances de una prerrogativa pública ligada al obligatorio mecanismo de pago de deuda pública instituido por la LP 8851 (con carácter de orden público) y no existe otra vía procesal útil para discutir la manifiesta lesión a la prerrogativa pública arbitrariamente desconocida (Cf. CSJN, Fallos: 178-337; 302-1280; 317-1071; 322-82, 1201 y 2132; 324-826; 339-1812, entre otros).

Pues, *"Los jueces no pueden hacer declaraciones tendientes a la decisión de juicios futuros, ni resolver otros distintos al actualmente sujeto a su pronunciamiento"* (CSJN, Fallos: 193-524).

Entiendo que la estimación del planteo de inconstitucionalidad de la LP 8851 y de su reglamentación aducida en la SENTENCIA de fecha 14/08/2019, no sólo implica el desconocimiento injustificado de la legitimidad de la LP 8851, sino la arbitraria lectura de las disposiciones de la LP 8851,

de su reglamentación, así como de su inserción en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso.

A mi criterio, esta lectura implica un razonamiento notoriamente carente de fundamentación decisiva y suficiente, cuando menos, por las siguientes razones.

2.1. LA ARBITRARIA PRESCINDENCIA DE LA LP 8851

La primera razón para requerir la anulación de la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 radica en que -a mi entender- la Sra. Jueza de 1ª Instancia concluye infundadamente que la LP 8851 sólo sería una "prórroga de la inembargabilidad" ligada a una declaración de "emergencia pública".

Para la Sra. Jueza de 1ª Instancia: "la extensión en el tiempo de estas leyes han prorrogado la inembargabilidad de los recursos del Estado durante años, modificando así la situación de excepción para la cual fueron creadas y convirtiéndolas en permanentes, perdiendo los requisitos esenciales de transitoriedad y razonabilidad, y afectando derechos amparados por nuestra Carta Magna, tales como los establecidos en los art. 14, 17 y 28 (...) Al mismo tiempo el estado permanente de inembargabilidad de los fondos públicos, tornan inejecutables las sentencias en las que se condena al Estado, creando de este modo una situación de indefensión del particular, en razón de la desigualdad de condiciones frente al poder del Estado".

Cabe abordar los siguientes puntos de partida. Por un lado, es preciso subrayar que **la única vía para que un magistrado judicial prescinda de la aplicación de una disposición normativa en vigencia radica en su declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto** (Cf. CSJT, SENTENCIAS 569/1995; 966/1996, 672/2007, 970/2007, 45/2010, 248/2012, entre otras).

Pero esa declaración de inconstitucionalidad debe responder a un "caso".

Por el otro, resulta imprescindible remarcar que, según un señero criterio de la CSJN, **"a nadie le asiste un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos"**, o bien, **"La modificación de una ley o reglamentación por otra posterior no origina cuestión constitucional alguna porque nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos"** (Cf. CSJN, Fallos: 333: 2222; 333: 108; 330: 3565; 330: 2206; 329: 976; 328: 2457; 327: 5002; 327: 1205; 326: 4030; 326: 1442; 325: 2875; 325: 2600; 325: 1297; 325: 11; 324: 2248; 323: 3412; 323: 2659; 322: 270; 322: 158; 321: 2683; 321: 1888; 320: 2825; 319: 3241; 319: 2610; 318: 1531; 318: 1237; 316: 2483; 316: 2043; 316: 1793; 315: 2999; 315: 2769; 315: 839; 311: 1880; 311: 1213; 310: 2845; 310: 1924; entre muchos otros).

Según entiendo, ambas puntos de partida muestran con claridad que la injustificada lectura que pregona la Sra. Jueza de 1ª Instancia respecto de la LP 8851 en el supuesto de autos. Quebranta las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, así como desconoce infundadamente el ejercicio legítimo de una prerrogativa pública derivada de los arts. 1, 5, 121-123 de la CN, en perjuicio del Estado provincial.

Más aún, cuando la LP 8851 adhiere a la Provincia a las disposiciones de la LN 25973 que, a su vez, remite a las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 20 de la LN 24624.

En este marco, es necesario resaltar que el argumento principal para reputar inaplicable por inconstitucional la LP 8851 y su reglamentación al supuesto de autos radica en la particular lectura que

la Sra. Jueza de 1ª Instancia propone respecto de la inembargabilidad. Figura que, de manera tan apresurada como injustificada, asocia a la emergencia pública.

La LP 8851 adhiere al sistema nacional de pago de deuda pública e incorpora la "inembargabilidad", si bien como rasgo permanente del sistema, pero de duración limitada en el tiempo, como una derivación de la prerrogativa de "previsibilidad presupuestaria" del Estado. Aspecto que, no sólo muestra un alcance razonable, sino cuya permanencia entre las reglas de la ejecución de sentencias contra el Estado está ligada a un determinado alcance temporal.

Al igual que las normas nacionales a las que adhiere, la LP 8851 implica una limitación temporal razonable en efecto ejecutorio de las sentencias contra el Estado que, por sí, no lesiona, ni las garantías de igualdad y debido proceso, ni el derecho de propiedad.

Cabe agregar que la sola circunstancia de que exista obligación de tramitar en sede administrativa el pago de un crédito público (aun derivado de indemnización expropiatoria) no vulnera, por sí, ni la garantía de igualdad ante la ley (Art. 16, CN), ni el derecho de propiedad (Art. 17, CN) (Cf. CSJN, Fallos: 313-1638).

La necesidad de transitar por un procedimiento administrativo de cobro de un crédito derivado de deuda pública, o bien, la inscripción en el registro de acreedores, sumada a la inembargabilidad temporal de los fondos públicos provinciales, deviene una regulación razonable del pago de la deuda pública en el marco de las potestades constitucionales confiadas a los Estado locales en el sistema federal argentino (Cf. Arts. 1, 5, 121-123, CN). La sola instauración de un sistema semejante no revela -por sí- la carencia de razonabilidad.

En este entorno, considero que en el punto impugnado la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 comporta un inequívoco apartamiento de las constancias de la causa y de las alegaciones de las partes (Cf. L. E. Palacio, *op. cit.*, p. 234. CSJN, Fallos: 320-511; 321-351 y 416; 322- 182 y 1038; 323-1455, 1774 y 2461), así como denota una decisiva carencia de fundamentación que culmina en una lectura auto-contradictoria del ordenamiento jurídico vigente que rige el caso.

La Sra. Jueza de 1ª Instancia alude como principal fundamento de su razonamiento para concluir en la inaplicabilidad por inconstitucional de la LP 8851 a la característica de "permanente" de la inembargabilidad derivada de la LP 8851 como si fuera un demérito cuando ese es, precisamente, el efecto propio y legítimo del principio de previsibilidad presupuestaria que inspira a la LP 8851. Así, el razonamiento impugnado exhibe tanto un apartamiento y una alteración de la plataforma fáctica que sustenta la petición procesal en debate como la omisión de apreciar circunstancias relevantes para una adecuada composición y resolución de la *litis* (Cf. L. E. Palacio, *op. cit.*, pp. 233-235).

Con punto de partida en que el derecho de propiedad (como todo derecho o garantía constitucional en el seno de una democracia constitucional) no puede reputarse con alcances absolutos (Cf. Arts. 14, 28 y 33, CN. Art. 30, CADH. CSJN, Fallos: 7: 150; 136: 161; 172: 21), **considero que la Sra. Jueza de 1ª Instancia omite conscientemente hacerse cargo de que la inembargabilidad (temporal) del Estado instituida por la LP 8851 y la limitación (temporal) al efecto ejecutorio de las sentencias dictadas en contra del Estado son rasgos legítimos y permanentes en el marco de la "previsibilidad presupuestaria" instituida.**

La segunda razón para requerir la anulación por arbitrariedad de la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 está dada por la circunstancia de que la LP 8851 no *"torna inejecutable"* la sentencia en contra del Estado, ni crea *"una situación de indefensión del particular, en razón de la desigualdad de condiciones frente al poder del Estado"*.

Considero que la Sra. Jueza de 1ª instancia prescinde infundadamente de la vigencia de la LP 8851 y de su marcada incidencia sobre el *"efecto ejecutorio"* de las sentencias condenatorias respecto del Estado provincial. Incluso en materia de expropiación (Cf. CSJT, 28/08/2006, SENTENCIA 797. Cf. CSJT, "Obispado", SENTENCIA 542/2018. Cám. Civ. Com. Común de Tucumán, Sala 3ª -Centro Judicial Capital-, "CURUBETO DE LABASTIDA", SENTENCIA del 18/09/2018).

El mecanismo de pago de deuda pública instituido por la LP 8851 tuvo vigencia y aplicación inmediata a las ejecuciones en trámite que no hubieren logrado efectivizar embargos al momento de su entrada en vigencia. Y esa es, precisamente, la situación existente en el supuesto en debate. La figura de la expropiación no resulta ajena a los alcances de la LP 8851.

Pues, cabe insistir en que la necesidad de transitar por un procedimiento administrativo de cobro de un crédito derivado de deuda pública, o bien, la inscripción en el registro de acreedores, sumada a la inembargabilidad temporal de los fondos públicos provinciales, deviene una regulación razonable del pago de la deuda pública en el marco de las potestades constitucionales confiadas a los Estado locales en el sistema federal argentino (Cf. Arts. 1, 5, 121-123, CN). **La sola instauración de un sistema semejante no revela -por sí- la carencia de razonabilidad.**

2.2. LA ARBITRARIA EQUIPARACIÓN DE "EMERGENCIA PÚBLICA" E "INEMBARGABILIDAD"

La tercera razón para insistir en la anulación por arbitrariedad de la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 radica en la circunstancia de que, según entiendo, la Sra. Jueza de 1ª Instancia funda su razonamiento en una absoluta e injustificada equiparación entre "emergencia pública" e "inembargabilidad" que soslaya marcadamente tanto la naturaleza como el alcance del mecanismo de pago de deuda pública instituido por la LP 8851.

Cabe partir sobre la base de que la LP 8851 no es una disposición de "emergencia" sino la regulación legítima (y con vocación de permanencia) del principio de "previsibilidad presupuestaria" para el pago de toda deuda pública de origen judicial que se traduzca en el pago de suma de dinero.

En efecto, la CSJT ha destacado que: "sí le esté habilitada la posibilidad de negar o desconocer que la sentencia en cuestión no constituye 'todavía' un título hábil por un motivo distinto; esto, en el sub lite, porque su exigencia quedó postergada y reconducida al cumplimiento de los trámites establecidos en la Ley 8851 y de su Decreto Reglamentario. Desde esta perspectiva, entonces, no existe la menor duda que el régimen instituido por la Ley 8851 y su Decreto Reglamentario N° 1583/1 (FE) (que no es sólo de inembargabilidad de los recursos públicos del estado sino también del trámite a seguir para el cobro o pago de las acreencias contra el mismo, según queda evidenciado con las transcripciones efectuadas ut supra) ha modificado decididamente al artículo 80 del CPA y siguientes (versión Ley 6205) al incidir, como se dijo, en la exigibilidad de la condena de sumas dinerarias contra el estado, sometiendo la satisfacción de dichos créditos a los trámites, tiempos y

condiciones establecidas en las precitadas normas. (...) Por lo expuesto, corresponde acoger favorablemente la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada y, en consecuencia, rechazar la pretensión ejecutiva articulada por el letrado (...)” (CSJT, 24/04/2018, “Obispado de la Diócesis de la Santísima Concepción s/ Prescripción adquisitiva”, SENTENCIA 542/2018).

Con igual criterio, la Cám. Civ. Com. Común de Tucumán, Sala 3ª -Centro Judicial Capital-, en “CURUBETO DE LABASTIDA”, SENTENCIA del 18/09/2018, ha sostenido que la LP 8851 “supedita el pago de las obligaciones que la provincia tiene para con sus acreedores -como los actores en autos- a un mecanismo administrativo ajeno a la ejecución ordinaria judicial reglada en el código procesal, con fundamento idéntico a otras leyes similares, esto es, el orden de las cuentas públicas”.

En este marco, entiendo que el razonamiento propuesto por la Sra. Jueza de 1ª Instancia prescinde abiertamente de la circunstancia de que la LP 8851 regula de manera legítima una atenuación al principio de que las sentencias judiciales dictadas en contra del Estado provincial tienen efecto ejecutorio (Cf. Art. 80, CPA). Atenuación que resulta aplicable -aún- en materia de indemnización expropiatoria.

El trámite previsto en la LP 8851 reviste carácter necesario, de orden público, así como de cumplimiento obligatorio por el interesado (Cf. CSJT, 28/08/2006, SENTENCIA 797, Dres. Goane -en disidencia-, Dato, Brito y Area Maidana extensible por analogía). (Cf. CSJT, 28/08/2006, SENTENCIA 797, extensible por analogía. CSJT, “Obispado”, SENTENCIA 542/2018. Cám. Civ. Com. Común de Tucumán, Sala 3ª -Centro Judicial Capital-, “CURUBETO DE LABASTIDA”, SENTENCIA del 18/09/2018).

La LP 8851 supone una ley especial cuyas disposiciones derogan -cuando menos, de manera implícita- a las leyes generales anteriores, sean las contenidas en el CPA, sean las contenidas en el CPCCT respecto de la ejecución de una deuda pública (Cf. Jorge Joaquín Llambías, *Tratado de derecho civil. Parte general*, Tomo 1, Buenos Aires, Perrot, 1995, 16ª edición actualizada, pp. 62/63).

Por consiguiente, desde este punto de mira, cabe sostener que la Sra. Jueza de 1ª Instancia omite ponderar -menos aún, de manera cabal, concreta y suficiente- que la LP 8851 ha limitado -por derogación implícita y, cuando menos, como resultado de una legítima dilación temporaria- al principio del "efecto ejecutorio" de las sentencias que pueden ser dictadas en contra del Estado provincial.

2.3. INEXISTENCIA DE CASO

La cuarta razón para requerir la anulación por arbitrariedad de la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 reside en que la Sra. Jueza de 1ª Instancia declara la inconstitucionalidad de la LP 8851 y de su reglamentación **sin advertir la efectiva existencia de "caso" en relación con la cuestión constitucional propuesta por la parte demandada.**

Pues, en palabras de la CSJN, "No compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos. (...) El sistema de control constitucional concreto supone que el tribunal de la causa asuma jurisdicción para dar certeza a una situación jurídica controvertida, y su pronunciamiento tiene por efecto inmediato reconocer el derecho de una de las partes en litigio frente a otra. No se puede pretender una decisión de la Corte Suprema que invalide

un acto sobre la base de agravios conjeturales y sin que las objeciones formuladas demuestren la existencia de una situación real y definida que haga perceptible el interés concreto y actual del reclamante. (...) No existe válido ejercicio de la actividad jurisdiccional que no presuponga una lesión materialmente perpetrada o, al menos, tentada, contra el derecho para el cual se procura la tutela. La admisibilidad de la acción está condicionada, pues, a la concurrencia de un interés así interpretado, único en que puede asentarse legalmente una petición de condena" (CSJN, Fallos: 301-991, entre otros).

La legitimación constituye un presupuesto necesario -aun comprobable de oficio por el Tribunal- para que exista una causa o controversia, y es, precisamente, la existencia de "caso" la cualidad que presupone la calidad de "parte", esto es, la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso, debiendo aquélla demostrar que persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la resolución de la controversia o que los agravios expresados la afecten de forma suficientemente directa o substancial (Cf. CSJN, Fallos: 333-1212, entre otros).

Es preciso subrayar que en la disputa judicial propuesta **la parte demandada no ha esgrimido ningún agravio directo, específico y diferenciado a su respecto en relación con la LP 8851 que le permita particularizar su situación en el colectivo de acreedores del Estado provincial alcanzado por dicha disposición normativa.**

En síntesis, con punto de partida en las razones invocadas, entiendo que la parte demandada omitió esgrimir argumento cabal, concreto y suficiente

alguno que tienda a demostrar la inconstitucionalidad pretendida respecto del trámite de pago de la deuda pública fijado por la LP 8851 y su reglamentación. **No ha sido alegado, ni mucho menos demostrado, que la LP 8851 establezca una dilación irrazonable en el pago de la deuda pública en debate.**

En palabras de Alberto B. Bianchi, "No hay caso judicial si este no posee actualidad" (Alberto B. Bianchi, *Control de constitucionalidad*, Tomo I, Buenos Aires, Ábaco, 2002, 2ª edición actualizada, reestructurada y aumentada, p. 296). Sobre esta base, cabe coincidir con el autor en que un "caso" nace, o bien, se torna "abstracto", cuando pierde una de sus condiciones esenciales: su actualidad. Pues, devela la "insubsistencia de interés jurídico suficiente" (Cf. A. B. Bianchi, *op. cit.*, pp. 304 y 310. CSJN, Fallos: 260: 153, entre otros).

Sin perjuicio de la admisibilidad del control de constitucionalidad de oficio, pesa sobre el litigante que controvierte la constitucionalidad de una norma la carga de demostrar, cuando menos, de modo sucinto, la medida en que la aplicación de la disposición normativa impugnada quebranta los derechos o garantías constitucionales cuya tutela pretende. Exigencia que se traduce en un deber de fundamentación suficiente que, según entiendo, el planteo de inconstitucionalidad de autos omite cumplir.

En este sentido, la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán, Sala 3ª, ha destacado que: "la impugnación deducida carece de puntualización alguna sobre la medida o incidencia en que la aplicación de la norma atacada vulnera o quebranta garantías o derechos consagrados por la Constitución y cuya tutela procura. (...) conviene precisar que la descalificación constitucional de una ley, decreto, ordenanza, etc., es considerada dentro del orden

jurídico como ratio última, lo que implica que la función de control de los jueces debe ser ejercitado con extremo cuidado (CSJN, Fallos: 242: 73; 14: 432; 247: 121). En consecuencia es dable exigir que el requirente demuestre acabadamente que existe una insuperable contradicción entre la norma impugnada y la ley fundamental, que no podrá ser reparada de ninguna otra forma que con la declaración de su inconstitucionalidad. (...) Así, en la especie cabe concluir que la ausencia absoluta de fundamentación, frente a los principios arriba señalados, torna inadmisibile la pretensión de declaración de inconstitucionalidad sub análisis" (Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán, Sala 3ª, 20/09/2011, "GARCÍA, SERGIO ARIEL vs. PROVINCIA DE TUCUMÁN s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD". Expte. 150/08. Planteo de inconstitucionalidad y excepción de caducidad de la acción, SENTENCIA 410).

Considero que ninguna de estas condiciones ha sido abordada por la Sra. Jueza de 1ª Instancia en su SENTENCIA del 14/08/2019. Pues, la parte demandada, no sólo incumplió en su impugnación con la carga de debida fundamentación aludida, exclusivamente escudada en afirmaciones tan genéricas como indiferenciadas, sino también su posición carece de un "interés jurídico suficiente" que pueda estimarse subsistente respecto de la inconstitucionalidad promovida en relación con la LP 8851 que regula el "caso" debatido.

La parte demandada no ha logrado demostrar una efectiva colisión normativa que en perjuicio de la situación jurídica invocada permita amparar el planteo de inconstitucionalidad formulado. Pues, la declaración de inconstitucionalidad impone a quien la pretende la carga de demostrar claramente de qué manera la ley que se cuestiona contraría la Constitución Nacional, exigencia que no se encuentra cumplida si no se demuestra cuál sería el efectivo perjuicio que le

habría irrogado al impugnante la aplicación de la norma legal cuestionada (Cf. CSJN, Fallos: 332-5; 331-718, 901 y 1434; 330-5111; 329-3235, entre muchos otros).

De allí, según entiendo, la marcada improcedencia de la declaración de inconstitucionalidad producida en la SENTENCIA del 14/08/2019 en relación con la LP 8851 y su reglamentación respecto del trámite de pago de deuda pública en vigencia y aplicable al caso.

Por lo tanto, entiendo carente de fundamentación decisiva y suficiente al razonamiento que intenta justificar la eximición del alcance de la LP 8851 respecto de la parte demandada. Menos aún, sin la acreditación de un agravio específico y directo respecto de la parte demandada que propone el debate.

2.4. SOBRE LA GARANTÍA DE "PAGO PREVIO" EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN EXPROPIATORIA Y EL PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL ESTADO INSTITUIDO POR LA LP 8851

La quinta razón para requerir la anulación del punto impugnado de la SENTENCIA de fecha 14/08/2019 está vinculada a la insuficiente lectura que propone la Sra. Jueza de 1ª instancia respecto de la garantía de "pago previo" en materia de indemnización expropiatoria y su relación con la previsibilidad presupuestaria de la LP 8851.

Cabe partir sobre la base de que la LP 8851 no vulnera el art. 17 de la CN.

En efecto, con punto de partida en la circunstancia de que la parte impugnante no logra demostrar una efectiva colisión normativa que en perjuicio de la situación jurídica invocada permita amparar el planteo de inconstitucionalidad formulado,

entiendo necesario subrayar la inexistencia de colisión entre los arts. 14, 17 y 28 de la CN con la LP 8851 y su reglamentación.

Pues, la declaración de inconstitucionalidad impone a quien la pretende la carga de demostrar claramente de qué manera la ley que se cuestiona contraría la Constitución Nacional, exigencia que no se encuentra cumplida si no se demuestra cuál sería el efectivo perjuicio que le habría irrogado al impugnante la aplicación de la norma legal cuestionada (Cf. CSJN, Fallos: 332-5; 331-718, 901 y 1434; 330-5111; 329-3235, entre muchos otros).

El art. 32 de la LP 5006 establece que: *"La sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión, que en ningún caso podrá ser superior al reclamado por el expropiado"*. Entiendo que el art. 32 de la LP 5006 importa una regulación razonable del derecho de propiedad, así como del alcance de la indemnización expropiatoria correspondiente. Aspecto que excluye la configuración de despojo, de confiscación, o bien, de enriquecimiento sin causa, en perjuicio del propietario.

La CSJN ha sostenido que el *"valor objetivo"* del bien declarado de *"utilidad pública"* radica *"en lo que la cosa realmente vale para la generalidad en el mercado de los bienes de esa especie, correspondiente al lugar del expropiado y al tiempo de la desposesión"* (CSJN, Fallos: 217-804).

Que el resarcimiento expropiatorio deba ser *"actual"* supone que la compensación económica del propietario sea fijada *"al momento de sufrir el desapoderamiento"* (Jorge Luis Maiorano, *La expropiación en la ley 21499*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y

Ciencias Sociales, 1978, p. 62. Cf. CSJN, Fallos: 204-534, 237-38, entre otros).

Que la sentencia deba fijar la indemnización expropiatoria "teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión" deriva de que este momento traduce por antonomasia la privación del uso y goce del bien declarado de "utilidad pública". De acuerdo con J. L. Maiorano, para el propietario "la expropiación se consume con la desposesión del bien" (J. L. Maiorano, op. cit., p. 65). A criterio del autor, "El 'tiempo de la sentencia definitiva', si bien ofrece la ventaja de su mayor proximidad con el pago efectivo, suscita (...) serias dificultades para determinar la valuación del bien. Por el contrario, el [tiempo] de la desposesión podría decirse que es un momento 'puro', alejado de los factores que aumentan o disminuyen ese valor. (...) Para la fijación del valor del bien expropiado deberá tomarse entonces el que dicho bien tenía al momento de la desposesión" (J. L. Maiorano, op. cit., p. 65).

Según la CSJN, "si se paga por lo expropiado lo que se determine, del modo preindicado, como valor venal del bien al tiempo del desapoderamiento, el reconocimiento será justo cualquiera sea la oscilación sufrida por el valor de los bienes de su especie entre la fecha de la desposesión y la del pago" (CSJN, Fallos: 208-164. Cf. CSJN, Fallos: 211-1641; 215-47; 218-816; 221-249; 223-180; 223-491; 224-234; 228-729, entre otros).

Según A. W. Villegas, "No debe tenerse en cuenta, para determinar el valor objetivo, el presunto valor posterior, por más razonable que parezca en virtud del aumento progresivo de los precios de bienes similares al que se expropia (factor denominado 'valor del porvenir'). No debe considerársele, porque la expropiación se efectúa sobre un bien actual y no sobre uno futuro, que si puede experimentar valorización

también puede ser afectado por una depreciación. El porvenir es siempre incierto" (A. Walter Villegas, *Régimen jurídico de la expropiación*, Buenos Aires, Depalma, 1973, p. 133. Cf. CSJN, Fallos: 240-18).

En este marco, es preciso remarcar que la garantía de "indemnización previa" instituida en el art. 17 de la CN exige que antes de consumarse totalmente la expropiación (mediante la transferencia del derecho de propiedad al sujeto expropiante) debe satisfacerse el pago de la indemnización. Un desajuste con la garantía prevista en el art. 17 de la CN radicaría, no en la "desposesión" por el sujeto expropiante como presupuesto de procedencia de EXPROPIACIÓN, sino en la transferencia de la propiedad antes de abonarse la totalidad de la indemnización expropiatoria.

Que la indemnización expropiatoria deba ser previa implica que mientras el sujeto expropiado no haya sido indemnizado, mantiene incólume su calidad de propietario del bien declarado de utilidad pública (Cf. A. W. Villegas, op. cit., p. 120).

En el sistema de la LP 5006, sea para EXPROPIACIÓN REGULAR, sea para EXPROPIACIÓN IRREGULAR, resulta indiscutible que **la transferencia no se produce mientras el pago de la indemnización expropiatoria no ha sido llevado a cabo** (Cf. Art. 39, *in fine*, LP 5006. Germán J. Bidart Campos, *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, Tomo 1B, Buenos Aires, EDIAR, 2006, 1ª reimpression de la nueva edición ampliada y actualizada a 1999-2001, pp. 384-387).

Por las razones invocadas, entiendo que resulta marcadamente infundado predicar una objeción constitucional de la LP 8851 por su pretendida lesión al art. 17 de la CN. Si la expropiación recién debe estimarse configurada con el pago de la indemnización

(Cf. Art. 39, LP 5006), el establecimiento de un sistema de pago de deuda pública como el previsto por la LP 8851 no resulta incompatible -por sí- con la garantía que el art. 17 de la CN establece respecto del pago de la indemnización al propietario expropiado.

3. PLANTEO DE CASO FEDERAL

Como consecuencia de las reglas procesales que imperan respecto de la admisibilidad del recurso previsto en el art. 14 de la LN 48, en tiempo y forma oportunos, formulo planteo en relación con la existencia de CASO FEDERAL.

En la controversia planteada en autos, la posición defendida por la parte demandada lesiona el derecho de propiedad, así como las garantías de "debido proceso" y "defensa en juicio". Asimismo, la posición propugnada por la parte impugnante pone en debate los requisitos de la expropiación y, con ello, no sólo vulnera el ejercicio legítimo de una prerrogativa pública confiada a un Estado local en virtud de la "autonomía provincial", sino también tiende al quebrantamiento del "debido proceso" y de la "defensa en juicio" como resultado de la arbitrariedad de una sentencia que acogiera su posición. El razonamiento del Sr. Juez de 1ª Instancia lesiona la prerrogativa pública de previsión presupuestaria para el pago de la deuda pública como instituto legítimo confiado al Estado provincial demandado. En este marco, una sentencia contraria a los intereses del Estado provincial revelaría una clara lesión de los arts. 1, 5, 17, 18, 33, 121, 122 y 123 de la CN.

4. PETITORIO

Por todo lo expresado, a V. E. solicito:

A) Que estime formulada la expresión de agravios respecto del RECURSO DE APELACIÓN incoado en relación con la SENTENCIA del 14/08/2019 que fuere concedido a mi representado según providencia del 19/09/2019.

B) Que, en su oportunidad, el Tribunal de Apelaciones estime atendibles los argumentos defendidos en representación del Estado provincial. En consecuencia, previo traslado al interesado, estime procedente la APELACIÓN fundada en la vigencia y en la aplicación al caso de la LP 8851.

C) Que, en subsidio de la procedencia del RECURSO DE APELACIÓN promovido, estime formulado y mantenido el planteo respecto de la existencia de CASO FEDERAL de acuerdo con las cargas procesales que rodean la admisibilidad del recurso previsto en el art. 14 de la LN 48.

JUSTICIA.-



19/09/2019
10:00